
TIERRA, GUERRA Y BANDIDOS EN LA REALIDAD COLOMBIANA

Por: Ricardo Oviedo Arévalo¹

HOMENAJE A ERIC HOBSBAWM

ELEGÍA A DESQUITE²

... Sí, nada más que una rosa, pero de sangre. Y bien roja como a él le gustaba: roja, liberal y asesina. Porque él era un malhechor, un poeta de la muerte. Hacía del crimen una de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba, lo mataron. Se llamaba "Desquite". De tanto huir había olvidado su verdadero nombre. O de tanto matar había terminado por odiarlo.

Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder...

... Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?

Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.

Gonzalo Arango

-
1. Doctor en Sociología, Profesor asociado UDENAR, Director del Departamento de Sociología. rioviedo@udenar.edu.co
 2. Elegía realizada por el poeta del movimiento "nadaísta" Gonzalo Arango (1931-1976), a José William Aranguren, alias "Desquite", bandolero que operaba en el norte del actual Departamento del Tolima a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. *Obra negra*. Bogotá, Plaza & Janés, 1993, pp. 42-44.

Fecha de recepción: 28 de octubre de 2012. Fecha de aprobación final: 15 de febrero de 2013.

RESUMEN

Colombia ingresó al siglo XX con la guerra más cruenta llamada “Guerra de los Mil Días” y terminó este siglo con un conflicto que aún no concluye. En cada período de violencia ingresan nuevos actores armados que defienden sus intereses políticos y/o económicos, en algunas ocasiones difíciles de diferenciar por sus intenciones bélicas; cada conflicto es generador de uno nuevo, hasta cubrir todo el territorio nacional y en algunas ocasiones afectando la convivencia internacional con sus vecinos, haciéndose necesario reconstruir procesos confiables en el tiempo, donde los diversos actores bélicos y políticos se comprometan a no mezclar, en el futuro, política y armas y donde se construya una sociedad sin exclusiones y profundamente tolerante.

Palabras claves: Bandidos, subversión, partidos, narcotráfico, minería, resiliencia

Clasificación: JEL: Y8.

GROUND WAR AND COLOMBIAN BANDITS IN REALITY

By: Ricardo Oviedo Arévalo

ABSTRACT

Colombia entered the twentieth century with the most bloodiest war, the “War of the Thousand Days” and ended the century with a conflict that is still not over. In each period enter new armed violence to defend their political and / or economic, sometimes difficult to distinguish by their war-like intentions, each conflict is generating a new one, to cover the entire national territory and sometimes affecting the international coexistence with its neighbors, making it necessary to build reliable processes in time where the various military and political actors agree not to mix politics and in the future where weapons and build an inclusive society and deeply tolerant.

Keywords: Bandits, subversion, parties, drugs, mining, resilience

JEL Classification: Y8

INTRODUCCIÓN

Después de los sucesos de la Revolución Francesa (1789), originada fundamentalmente por el concepto russoniano de la legitimidad de la rebelión para crear un nuevo pacto de gobernanza, la sociedad industrial e informática del siglo XX post II guerra mundial, trata de desvirtuar el papel del rebelde y de la rebeldía, incluso cuando existían regímenes oprobiosos, como las dictaduras militares que azotaron a América Latina en los últimos cien años, acuñando tempranamente el término de resistencia, a la oposición civil y/o armada de algunos países y movimientos europeos al avance del fascismo; y cuando se manifestaba relativamente pacífico el de opositor, en contra del término de rebelde, y con la implosión del mundo socialista se lo asimiló como terrorista.

De esta manera, el rebelde, esencia misma del surgimiento de la modernidad, quedó proscrito al mundo revolucionario francés de 1789, origen mismo del orden actual, identificando posteriormente cualquier hecho violento en el ejercicio de la política como rezagos del mundo primitivo y pre político moderno, que evaden la crítica a la injusticia de los regímenes que surgen desde los márgenes de la modernidad, negando su propio sistema de dominación, la democracia, y de sus agentes más radicales, los rebeldes, que se oponen desde su actividad política extrema a la injusticia.

Al contrario de otros países de Latinoamérica, en Colombia no fue posible una revolución liberal de sus instituciones desde la fundación de la República hasta hoy, es el único país de la región que mantiene casi intacta la misma dirigencia política desde sus primeros respiros republicanos decimonónicos, conserva el establecimiento institucional con un trasfondo de violencia continua y generalizada, ha deformado el ejercicio de su democracia y ha restringido sistemáticamente a los partidos y movimientos de izquierda del ejercicio del poder, como en el caso de la Unión Patriótica, perseguido hasta su extinción (Roll, 2002:117).

Con la llegada al poder, a partir de los años noventa del siglo pasado, de los diferentes movimientos y partidos excluidos por su pensamiento crítico del ejercicio del poder tradicional en los países de América latina, estas agrupaciones políticas, al empoderarse, han demostrado, en muchas ocasiones, la validez de sus planteamientos programáticos en lo económico y social, como lo muestra Chile (1990-2010) después de la dictadura, gobernado por la alianza de centro izquierda Concertación de Partidos por la Democracia, convertida hoy en una potencia económica, con reducidos indicadores de pobreza. Lo mismo sucede con el avance de corrientes de este mismo espectro político en Uruguay, con el Frente Amplio (1971), y Argentina, con el Partido Justicialista (1947), sobresaliendo el gigante Brasil, convertido hoy en una de las cinco economías más poderosas de la tierra, y

su mejor momento de desarrollo lo ha tenido con gobernantes de extracción popular y sindical como Luiz Ignácio Lula da Silva (2003-2011), y como su actual presidenta Dilma Russoff (2011), hija de inmigrantes comunistas de origen búlgaro, guerrillera y una de las fundadoras del actual partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores (1980-) (Denis, 5:2006).

GUERRAS DECIMONÓNICAS Y ESTADO NACIONAL

Colombia ingresó al siglo XX con la guerra más sangrienta de su historia, la Guerra de los Mil Días (1899-1902), donde perdió una tercera parte de su población; se modificó el mapa político de la República al segregarse el departamento de Panamá, y, en general, el país quedó empobrecido y se revalidó por vía de las armas, lo que se conoce como la “hegemonía conservadora” que terminó en 1930. Sin embargo, esta guerra tenía su cara oculta: los liberales, que nuevamente perdían ante sus rivales históricos, los conservadores, no se rindieron del todo; después del armisticio, empezaron a preparar un nuevo conflicto, el de los años cincuenta, conocido eufemísticamente como el periodo de la “violencia” (1948-) y que hoy aún continúa.

Pero, también, este conflicto civil mostró los actores que serían protagónicos en los próximos eventos bélicos: los dos partidos tradicionales colombianos, el Liberal (1848) y Conservador (1849) y los Estados Unidos de América, que sirvieron de mediador del conflicto, en el acorazado Wisconsin, fondeado en el mar Caribe: allí firmaron el armisticio y el destino para los próximos años en Colombia, la intervención soterrada o abierta de este país en los asuntos internos de esta “violenta” república.

Como en el presente, la Guerra de los Mil Días desbordó los límites del país y rápidamente se inmiscuyeron los antiguos miembros de la gran Colombia, Venezuela y Ecuador, este último interesado en impedir el apoyo brindado desde Pasto a sus rivales conservadores, por intermedio del obispo español Ezequiel Moreno Díaz (1848-1906), el mayor opositor a la modernización y que dio refugio en su territorio al también intolerante obispo de Portoviejo (Manabí, Ecuador), Pedro Schumacher (1839-1902), expulsado por el presidente Eloy Alfaro (1842-1912), por su intransigencia frente a la revolución liberal que él dirigía.

En esta contienda, también, se prolonga en el tiempo la imagen del guerrillero, de origen campesino dependiente del latifundio y de sus propietarios, los tradicionales caudillos de los dos partidos tradicionales, verdaderos señores de la guerra, como es el caso del guerrillero Tulio Varón (¿?-1902), llamado por su biógrafo, Eduardo Jaramillo, “el guerrillero de la esperanza”, y, que tuvo como centro de operaciones el actual departamento

del Tolima, y en especial, su capital Ibagué, donde cae asesinado luego de finalizar el conflicto (Jaramillo,1987).

En esta guerra civil, se puede encontrar uno de los pilares de la actual confrontación bélica: la intolerancia partidista y el desconocimiento del “otro”, como actor político e interlocutor válido y la relación estrecha entre partidos y sus dirigentes latifundistas, como sector intolerante frente a cualquier tipo de reformas sociales o políticas, que modificaran la pirámide vertical y su rígida estratificación social, que tenía como columna central la clase señorial proveniente de la Colonia y que estaba enquistada en la república defendiendo los derechos heredados en el anterior régimen, que se sostenía en el Estado a comienzos del siglo XX.

Por lo tanto, esta guerra de los mil días es una prolongación de las guerras civiles del siglo XIX y de la impotencia de los actores más modernizantes y liberales para imponer su agenda política, cosa que, con algunos altibajos, se mantiene hasta hoy día.

A mediados del siglo XX, con el ingreso al teatro de operaciones de la llamada “guerra fría”, el dilatado conflicto colombiano se puede clasificar, según Kalevi Holsti (1966), como guerras del tercer tipo, donde la interlocución de lo local o regional con el Estado central es traumática hasta el punto que se hace ruido no solo a través del Parlamento sino también desde las regiones a través de las armas, como dice Hosti:

Donde lo que está en juego es el papel de la comunidad dentro del Estado, la gobernabilidad y el papel de la imposición de las naciones y las comunidades dentro de los estados. El análisis acerca de la estructura política que se teje alrededor del conflicto en Colombia evidencian la principal distinción de las guerras de tercer tipo, las luchas por el poder local en comunidades donde el Estado ha colapsado (Duncan, 2004:4).

LAS GUERRAS DE MEDIADOS DE SIGLO XX

Hacia finales del siglo XX ingresan nuevos actores armados al conflicto, como los narcotraficantes, los grandes contrabandistas y esmeralderos, como Víctor Carranza (1935-2013)³; y actores reciclados de otros conflictos, como los grupos paramilitares. El ingreso de todos estos, acentúan aun más los efectos de la guerra: el primero, por sus recursos económicos casi ilimitados, poder de corrupción, vendettas intimidatorias, estructura violenta y poder de alianzas políticas o militares con élites locales o nacionales y con

3. Nacido en una familia pobre de Guateque, Cundinamarca, es considerado propietario de más de un millón de hectáreas de tierras y es concesionario de las minas de esmeraldas de Colombia. (<http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31103/victor-carranza>).

las instituciones legalmente instituidas; y el segundo, por ser parte de una estrategia política-militar de *combinación de todas las formas de lucha* de los sectores más militaristas y reaccionarios de la vida política nacional e interesados en mantener un *statuo quo*, que les garantiza su sobrevivencia en el tiempo.

Aunque mafia y paramilitarismos o su combinación son proyectos profundamente conservadores que buscan mantener el *establecimiento imperante* y con ello todos sus privilegios económicos, políticos y sociales que lo sustentan, se identifican con el accionar de la insurgencia armada por su carácter de ilegalidad y marginalidad de sus actividades, además de compartir sus territorios, sus recursos naturales y su afán de controlar los recursos económicos de sus zonas de influencia, y son los mismos actores herederos históricos del mundo violento de la vida colombiana y que aspiran, como objetivo final del conflicto a la dominación total o parcial de su territorio de influencia, que garantice la existencia y consolidación de su proyecto económico y político o su mezcla.

De esta manera, el historiador y sociólogo inglés Eric Hobsbawm (1917), se pregunta en su texto *Bandidos* (1969), por qué en diferentes partes del mundo surgieron estas formas arcaicas de movimientos sociales, que muestran:

La rápida desintegración del poder y la administración del Estado en muchas partes del mundo y la notable disminución de la capacidad de los estados, incluso de los modernos y desarrollados, para mantener el nivel de "orden público" que crearon en el siglo XIX y XX (Hobsbawm, 2003:7).

Uno de los factores que señala, este autor, es las contradicciones generadas por los cambios estructurales en su cuerpo social, en especial, el tránsito de un Estado pre-moderno⁴ a un Estado donde surgen las clases sociales y las contradicciones modernas, lo que él llama estados de régimen intermedio, y donde la resistencia popular se expresa como parte de la defensa de grupos sociales a los cambios que los afectan dramáticamente e impuestos casi siempre desde fuera por las leyes del mercado; en muchas ocasiones, cuenta incluso con el apoyo de fuertes y poderosos grupos de poder que también ven amenazadas su influencia y hegemonía, de esta manera Hobsbawm nos dice que:

4. Para este tipo de desarrollo político, Hobsbawm, en su texto *Rebeldes primitivos*; define a los miembros de esos movimientos sociales como: "gentes pre políticas, que todavía no han dado, o acaban de dar con un lenguaje específico en el que expresar sus aspiraciones tocantes al mundo". HOBSBAWN, Eric. *Rebeldes primitivos*. Barcelona: Editorial Ariel, 1983, p. 11.

El bandolerismo, como expresión de esta resistencia colectiva, ha sido muy común en la historia, sobre todo porque, en estas circunstancias, disfruta de considerable apoyo por parte de todos los estamentos de la sociedad tradicional, incluso de los que tienen el poder. Esto es lo que tiene en común la economía semi-nómada de los pastores de clanes, de donde tradicionalmente salía la mayor parte de los bandidos de los Balcanes y Anatolia, los gauchos libres de las llanuras argentinas decimonónicas que oponían resistencia a la ciudad y a las leyes burguesas sobre la propiedad, junto con caudillos rurales y los cafeteros colombianos del siglo XX que protegen a “sus” bandidos. Todos se resisten a la invasión del poder de la autoridad y del capital proveniente de fuera (Hobsbawm, 2003:21).

Indudablemente, a estos factores de cambio en sociedades pastoriles y frágiles como la Colombia de mediados del siglo XX, se resistieron extensos grupos sociales, en especial, en las zonas rurales, donde la presencia del Estado era escasa o intermitente y la de los terratenientes y comerciantes era fuerte y permanente; de esta manera, cada conflicto social generó sus propios procesos de desterritorialización y/o de desplazamiento: los perdedores de la guerra de 1902 poblaron los Llanos Orientales, el piedemonte amazónico, las tierras medias de la Cordillera Central y el ignoto sur, esto debido a las pírricas garantías ofrecidas por los vencedores. Los perdedores colonizaron territorios históricamente abandonados, ampliando la frontera agrícola y urbana del país en forma desordenada y espontánea.

Estos desconfiados colonos crearon sus propios imaginarios de “legalidad” y se resistieron a la presencia de un Estado que no les garantizaba su propia vida y que codiciaba sus tierras, identificándose más con una dirigencia liberal de origen urbano, partidarios de la industrialización y de la creación de organizaciones sociales que los protegieran contra la voracidad de estos “patriarcas rurales”, que veían a los actores económicos ligados al campo como sus potenciales enemigos, los ricos hacendados y comerciantes “conservadores”, que tenían su clientela política entre los peones y pequeños propietarios campesinos. Se creaban así las condiciones para una nueva contienda partidista, la que se inició con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán (1898-1948), representante de la Colombia urbana y modernizante, que aún encontraba dificultades para su consolidación entre las élites premodernas nacionales con fuerte arraigo rural.

Este conflicto, que eufemísticamente se conoce como la “violencia” (1948-1953), es en realidad un enfrentamiento con un alto grado de pauperización de la guerra: la mutilación de cadáveres, la matanza generalizada e indiscriminada de la población civil, eran cotidianas.

Las autoridades legalmente instituidas, con frecuencia, se exhibían en la prensa nacional y local con fotos de los combatientes de cada lado, con sus cabezas en la mano, como señal de trofeo, utilizando el terror como arma psicológica, contra los “bandidos”, que el mismo Estado había creado y que por temor a que se saliera de sus manos el conflicto, cada vez los veía más como un potencial peligro que podía desbordar las intenciones iniciales de exterminar al supuesto enemigo liberal y comunista anticlerical que surgía de los nacientes centros urbanos. Uno de los primeros estudios realizados desde la Universidad Nacional de Colombia, *La violencia en Colombia* (1963), fundamenta su origen de la misma en el edificio social que la sustenta y no en ningún tipo de rasgos de predisposición genética o histórica, a la barbarie del pueblo colombiano. Para el sociólogo Orlando Fals Borda (1925-2008), la violencia es consecuencia de una revolución social frustrada; estos actos radicales, eran producidos por una forma de gobernanza esquizoide, donde la resistencia al cambio llevaba implícito el desconocimiento extremo de sus protagonistas y una respuesta violenta contra ellos, que incluía el exterminio del otro como demostración de poder y terror para los sobrevivientes⁵ (Fals Borda, 1963).

Para el sociólogo francés, Daniel Pécaut, este periodo de “violencia” no contempló la transformación de las estructuras sociales, ni siquiera se originó dentro de un espíritu reformista de cambio; su carácter era profundamente conservador y continuista; sus principales protagonistas, los partidos Liberal y Conservador, se mantienen incólumes e incluso se fortalecen con la alternancia milimétrica del poder originada por el denominado Frente Nacional (1958-1974), excluyendo otras fuerzas políticas, como el Partido Comunista (1930), mientras que el Estado central perdurará en el tiempo como una institución débil, intermitente y ausente, que, para demostrar su escasa presencia en las fronteras regionales, recurre a la delegación incondicional de territorio a los “caciques o gamonales” de los dos partidos tradicionales, los cuales representan la institucionalidad en las regiones con su poder omnímodo, base de la clientela partidista que garantiza un electorado sumiso y ajeno al manejo de la cosa pública, y en casos extremos, de la posible pérdida de esta hegemonía clientelar, se recurre a la presencia del ejército o de actores violentos que retomen el control de los aparatos de representación popular y de sus instituciones, y para los hechos de “orden público nacional” al Estado de Excepción (anteriormente llamado, Estado de Sitio), como forma de poder lograr algún grado de gobernabilidad. Esta

5. Para ver con mayor profundidad los resultados de esta investigación, leer el texto *La Violencia en Colombia*, de: Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1963.

“institución clientelar” es una sobreviviente de la conformación de la República en el siglo XIX (Pécaut, 1985:173).

Varios pensadores colombianos coinciden en que Colombia ingresó al siglo XX tardíamente y más como país que como nación. El Estado, una institución débil, frente a las poderosas regiones históricas formadas en el pasado colonial, la Iglesia y sus élites latifundistas, era impotente para fortalecer y revalidar sus instituciones, en especial, por su escasa presencia y poblamiento en la lejana frontera agrícola: la región cafetera de la cordillera Central y Oriental de los Andes y el piedemonte llanero. Este vacío lo llenaron con paciencia las ligas campesinas creadas y dirigidas por el naciente Partido Comunista (1930), surgido de intelectuales, artesanos y obreros influenciados por la revolución bolchevique de 1917 que, para los años cincuenta del siglo pasado, encabezaba la protección de extensas comunidades asentadas alrededor de la población de Viotá, en el departamento de Cundinamarca, y de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima. El Partido Comunista y algunos sectores liberales coincidían en este propósito de defender a los pequeños propietarios de la tierra, hasta llegar a llamar a la autodefensa armada de estas comunidades como respuesta de supervivencia frente al ataque sistemático del Estado y de sus bandas de “pájaros o chusmeros”, surgiendo, de esta manera, lo que Hobsbawm define como “bandidos sociales”, con fuerte apoyo social, que garantizaba su existencia.

Por lo tanto, para comprender el bandolerismo y su historia debemos verlo en el contexto de la historia del poder, es decir, del control por parte de los gobiernos o centros de poder (en el campo principalmente de los dueños de la tierra y el ganado) de lo que sucede en los territorios y entre las poblaciones sobre los que pretende ejercer el control (Hobsbawm: 24:2006).

Por lo tanto, liberales y comunistas se oponen a la política excluyente del gobernante Partido Conservador, en extensas zonas del centro del país y de los llanos orientales, organizan y dirigen columnas y batallones guerrilleros. En la cordillera central, la guerrilla liberal es dirigida por Juan de la Cruz Varela (1902-1984) y Manuel Marulanda Vélez (1930-2008) y por el Partido comunista, Jacobo Prías Alape (¿-¿), en el sur del Tolima y Huila; éstos rompen su alianza, por presiones de la dirigencia liberal ante la inminencia de un pacto entre los dos partidos tradicionales, para detener el avance de las guerrillas, calificadas tempranamente como cercanas al bolcheviquismo o por lo menos agentes del caos social, y por el peligro de perder el control militar y político, en especial por el auge de las autodefensas campesinas de orientación comunista, que tempranamente se habían instalado en el estratégico corredor del páramo de Sumapaz, muy cercano a Bogotá, región

productora de café, que para los años sesenta era el primer producto de exportación del país⁶.

Esta transformación de bandidos a rebeldes, de algunos de los dirigentes más ligados al sector cafetero minifundista y con pasado cercano de colonos “recién instalados” y que aun no habían legalizado sus predios, que pretendían comerciantes, políticos y latifundistas, el historiador Hobsbawm la define así:

Los bandidos, por otra parte, comparten los valores y las aspiraciones del mundo campesino y son por lo general igual, que los proscritos y rebeldes, sensibles a sus impulsos revolucionarios. Por condición de hombres que han ganado ya su libertad, pueden mostrar normalmente desprecio hacia las masas inertes y pasivas, pero en épocas de revolución esta pasividad desaparece. Grandes masas de campesinos se convierten en bandidos (Hobsbawm: 119:2003).

Con la puesta en marcha del Frente Nacional en 1959 se impone la rotación de los partidos tradicionales Liberal y Conservador y el reparto milimétrico de las cuotas burocráticas en el manejo de la cosa pública. El gobierno conservador de Guillermo León Valencia (1962-1964), diseña, en conjunto con la Secretaría de Estado de Norteamérica, el plan LASO (Latin American Security Operation), que termina con la toma de la “república independiente” de Marquetalia, pequeño corregimiento recién fundado del municipio de Planadas, departamento del Tolima, situado en la cordillera Central, sitio emblemático de las autodefensas campesinas y de las actuales FARC- EP.

Con la ejecución de este Plan, por primera vez se internacionaliza el conflicto en Colombia haciéndolo parte del escenario de la Guerra Fría (1945-1989)⁷, ahondando las diferencias partidistas entre los dos bandos históricos de la contienda política colombiana, para convertir a los campesinos mi-

6. Para ver más de cerca el origen de las autodefensas campesinas en la región del Sumapaz y su relación con la hacienda cafetera, leer el texto de Rocío Londoño Botero: *Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región del Sumapaz (1902-1984)*. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2011.

7. La incidencia de las guerras entre los estados ha disminuido drásticamente desde 1945, al tiempo ha habido un aumento impresionante en el número de guerras en el interior de los estados. Desde 1945 la mayoría de las víctimas, es decir las personas que han muerto en forma violenta, han perecido en manos de sus propios gobiernos, o bien por milicias compuestas por sus propios vecinos; es decir, sus muertes no son imputables a ningún ejército extranjero. Si se desea comprender este tipo de problemática es necesario incurrir en otras áreas: política comparativa, economía, agotamiento de los recursos, demografía y toda una serie de cuestiones que por regla general no se incluyen en la concepción tradicional de la guerra como tema de estudio... El racionamiento implícito de la guerra como una cruzada estilo Clausewitz exige una consideración. Muchas de las guerras no son ejemplos de la consecución de la política por otros medios, y quienes toman parte en ellas no siempre tienen por objeto ganar la guerra, sino desarrollar una cultura de la guerra que les permita obtener un beneficio personal a partir de las múltiples prácticas criminales y extorsionistas de

serables en refugiados de todas las guerras, como parte de la conspiración mundial del comunismo en América Latina. Sus dirigentes más destacados, Manuel Marulanda Vélez y Juan de la Cruz Varela, se cambiaron de bando, de ser guerrilleros del Partido Liberal a guerrilleros comunistas; sus lugares de refugio declarados como “Repúblicas Independientes”, por el influyente político e hijo del líder conservador Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995), quien veía el peligro de extenderse la revolución cubana (1959) a Suramérica, convirtiendo las montañas de Colombia en la Sierra Maestra del continente (Ferro, 2006:33).

Todo esto sucede en un momento crucial para Colombia: el país se urbanizaba a pasos agigantados y despegaba su industrialización⁸ y, por tanto, surgían nuevas clases y actores sociales que reclamaban profundos cambios en la estructura social, considerándose el más importante, el relacionado con la tenencia de la tierra, que históricamente ha estado en manos de grandes terratenientes improductivos. El primer intento de reforma se realizó durante el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), expidiendo la Ley 200 de 1936, que introdujo la función social de la propiedad, con la posibilidad de extinción de dominio, en caso de declararse ociosa. La reacción de los propietarios no se hizo esperar, convirtiéndose en una de las causas de la “violencia” de los años cincuenta, que dejó más de 200 mil muertos y dos millones de desplazados, casi todos ellos provenientes de zonas rurales.

En 1961 se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, que buscaba democratizar el uso de la tierra. En 1973 se firma el Pacto de Chicoral, entre el Gobierno y los partidos políticos, que aborta cualquier posibilidad de modificar el uso del suelo rural y se dirigen todos los esfuerzos hacia la colonización de tierras, frustrándose así la reforma agraria que pedían los campesinos y los sectores reformistas del país. Sin embargo, la

que se valen para dar curso a su propia violencia. No es fácil encontrar la línea divisoria entre la guerra y la criminalidad en muchos de los conflictos actuales. Rousseau afirmaba que en la guerra se mata sólo para ganar, pero en las guerras contemporáneas la afirmación de Rousseau se formula a la inversa. Hitler, siguiendo el ejemplo de las guerras coloniales europeas y estadounidenses del siglo XIX, pretendía ganar para matar. El objetivo de la guerra solía ser ganar en el sentido más convencional, pero ahora consiste en erradicar y limpiar étnicamente las poblaciones civiles y beneficiarse de las actividades criminales”. El mundo y la guerra. Adam Jones. Entrevista con Kal Holsti. p. 97. Revista notas y diálogos.

http://www.istor.cide.edu/archivos/num_8/notas1.pdf

8. En 1950, el 66.1% de la población vivía en el campo, el sistema vial era prácticamente inexistente, la industria manufacturera elaboraba productos de consumo, como textiles, cervezas y cigarrillos, sólo existían 15 centros urbanos con población de más de 20.000 habitantes. Diez años después, el 60% de la población vivía en las ciudades, se habían construido 2.500 kilómetros de vías pavimentadas, había ingresado el monocultivo de arroz, algodón, sorgo, etc., y habían surgido los centros industriales en ciudades como: Bogotá, Medellín y Cali. Saavedra, Ruth (2001). Planificación del desarrollo. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, pp. 156-157.

realidad desbordó estas intenciones gubernamentales al adoptar cada vez más el modelo aperturista neoliberal, al extenderse sobre el territorio nacional la presencia del conflicto armado y la permanente concentración de la tierra en manos de propietarios ausentistas, así como la conformación de bandas paramilitares, los colonos volvieron a poblar en forma espontánea y desordenada estos lugares y otros más, como el piedemonte amazónico, el Magdalena Medio, el Urabá chocoano y antioqueño y el piedemonte de la llanura del Pacífico, donde estos nuevos pioneros se encontraron con presencia de agroindustria, se fortalecieron las organizaciones sindicales como Sintrainagro, en el caso de Urabá, e hicieron presencia partidos de izquierda, como la extinta Unión Patriótica.

En otros lugares, el narcotráfico había llegado primero o fue un factor potencial para su poblamiento (llanura del Pacífico, piedemonte amazónico), se establecieron redes del narcotráfico en todas las zonas de la frontera agrícola articuladas con centros urbanos de importancia, como Medellín, Cali, Pasto y Santa Marta, y se extendieron sus lazos de corrupción e intimidación sobre las instituciones del Estado, además conectan a empobrecidas y aisladas regiones del país al circuito internacional de mercancías, a partir de su vinculación al mercado ilegal de las drogas, crean una cultura de consumo suntuario innecesario, cambiando, de esta manera, las costumbres solidarias y de estructura familiar vernácula de sus pobladores; desestructuran por vía de la violencia física las organizaciones comunitarias y cívicas que estas comunidades habían formado, dejando a los pobladores en manos de las redes y actores de mafia de las drogas, como dice la investigadora, Elsa María Fernández:

En tal contexto, la crisis económica y social de las élites regionales favoreció al surgimiento del narcotráfico y ascenso social y económico de los nuevos empresarios, produciéndose una recomposición social. Desde entonces se generó una red de complicidades y lealtades (entre las élites públicas y privadas con los narcotraficantes) manejadas mediante el dinero y/o el empleo de las armas.

Vinculado a este proceso, se dio el reclutamiento de guardaespaldas, testaferros y sicarios, facilitado por las contradicciones sociales locales (como la violencia y el desempleo). De tal suerte, la incapacidad del Estado para atender las demandas sociales y su escasa presencia regional dejaron en manos de los agentes particulares locales la solución y mediación de conflictos, alentando el surgimiento y posterior consolidación del sicariato y del paramilitarismo (Fernández, 2002:101).

A partir del año 2000, con una fuerte presencia del narcotráfico y de los paramilitares en las zonas rurales más productivas, se expropiaron a pequeños y medianos propietarios 3 millones de hectáreas, que a su vez han generado

más de 3 millones de desplazados, de esta manera, la contra-reforma agraria se abrió paso a punta de terror, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), representante del sector ganadero y latifundista más retardatario de la zona de influencia del Departamento de Antioquia (norte de Colombia), en conjunto con altos funcionarios de su gobierno que concibieron el desarrollo rural como un fortalecimiento del gran capital y, en no pocas ocasiones, como un botín para políticos afectos a su gobierno⁹, en contravía de las demandas de los medianos y pequeños agricultores, y, en especial, de aquellos que fueron obligados a la fuerza a desplazarse a los grandes centros urbanos o los países vecinos de Ecuador y Venezuela; el ex director del Incoder, Juan Manuel Ospina, reconoció en una entrevista realizada por el diario El Tiempo, que: “*los enredos que vive hoy Colombia, son por los enredos de la tierra*” (El Tiempo: 7 de marzo de 2011).

Este ingreso masivo del narcotráfico a la vida colombiana, desde los años setenta del siglo pasado, tuvo en su inicio una buena aceptación social, en especial, en los Departamentos de la Costa Caribe, cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, escenario escogido por los narcotraficantes para sembrar marihuana, aprovechando la riqueza bioclimática, la cercanía al

9. PERIÓDICO EL TIEMPO: sección justicia, página 7 de marzo de 2011): El director de la entidad (Instituto Colombiano de desarrollo Rural, Incoder) Juan Manuel Ospina, anunciará en las próximas horas la decisión de revocar la adjudicación de baldíos de la Nación a varios dirigentes políticos y sus allegados.

Uno de los casos es el del ex senador risaraldense Habib Merég, quien logró que 38 mil hectáreas en Vichada fueran entregadas a varias personas del movimiento al que pertenece, Colombia Viva, a la Unidad de Trabajo Legislativo del Senado (UTL), y a la empresa Cable Unión S.A., a la que estuvo vinculado por años. Cuando estalló el escándalo, en el 2007, Merég **afirmó que era posible que “amigos” suyos hubieran sido favorecidos con tierras para megaproyectos agrícolas, pero aseguró que no había irregularidades** en ese trámite. Aunque hace dos años el Ministerio de Agricultura y el Incoder habían anunciado que echarían para atrás esas entregas de tierras, lo cierto es que sólo hasta ahora se inició en firme el proceso.

LA DENUNCIA. La adjudicación de las tierras **benefició a unas 31 personas, pero se sabe que ellos mintieron sobre aspectos fundamentales:** “Ninguno pudo acreditar haber vivido cinco años en la zona y, tampoco, tener explotadas las dos terceras partes del predio que reclaman”, explicó uno de los investigadores. Por eso, el Incoder y el Ministerio de Agricultura hallaron méritos jurídicos suficientes para revocar las Resoluciones de adjudicación y para ordenar que se investigara disciplinariamente a Carlos Velásquez Pérez, jefe de la oficina de enlace territorial, quien aprobó las titulaciones. En su momento, El Tiempo encontró que en la lista de 31 adjudicatarios había personas directamente relacionadas con Habib Merég.

El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, aseguró que las tierras que fueron obtenidas irregularmente en Vichada ya fueron recuperadas por el Estado. “Ya estamos en la segunda etapa de ese proceso, estamos estudiando los procesos productivos que pueden realizarse en esos baldíos para ubicar allí a los campesinos y desarrollar allí procesos productivos”, aseguró Ospina. Para el director del Incoder la gestión de recuperar las tierras es positiva para el país, puesto que “**los enredos que vive hoy Colombia se deben a los enredos de la tierra**”.

“Me parece que se ha reconocido que este tema del manejo de la propiedad de la tierra rural se ha podido abordar en su complejidad de manera interinstitucional y eso es un avance fundamental”, agregó. Por eso el Instituto revocó las 31 Resoluciones de adjudicación otorgadas en jurisdicción del municipio La Primavera, en Vichada. Lo anterior se basó en que los titulares de los predios no eran sujetos de Reforma agraria y los inmuebles no venían siendo ni ocupados ni explotados.

mar, la escasa presencia del Estado en la región y la ausencia de guerrilla para la época; muchas de sus historias sirvieron para dramatizarlas en la televisión nacional, como *La mala hierba*, del conocido periodista costeño Juan Gossain (Gossain, 1983).

La segunda oleada del comercio de narcóticos se realizó a partir de los inicios de los años 80, con el cultivo masivo de coca, que desplazó los cultivos ilícitos de la región Caribe a las selvas del sur de Colombia, donde la presencia guerrillera era histórica y tenía como ejército de reserva a miles de colonos que habían llegado a estas zonas en forma desorganizada por la violencia de los años cincuenta, encontrándose así dos mundos “violentos”: el del hampa criminal del narcotráfico, que representa la antisociedad, *que existe mediante la inversión de los valores del mundo decente en mundo descarriado, pero por otra parte vive de él parasitariamente*, y del mundo revolucionario con utopías políticas a largo plazo y que quería construir un mundo “recto”, (Hobsbawm, 2006: 118) a partir del modelo de valores de la sociedad socialista vigente para la época y que había creado su propia estructura social con base en sindicatos y asociaciones de todo tipo, pero que aun tenían la ruralidad como su punto de referencia fundante, como lo muestra la queja de Marulanda Vélez por la muerte de unos cerdos de su propiedad cuando el ejército se tomo el campamento de Casa Verde (municipio de La Macarena, Departamento del meta) en 1991.



Los guerrilleros liberales Guadalupe Salcedo (primer plano) y Dumar Aljure (con sombrero). En los Llanos Orientales. Foto tomada en 1954, durante las negociaciones de paz (Foto de Carlos Caicedo).

Pero el encuentro de estos dos mundos es, a su vez, el encuentro de dos propuestas diferentes para construir la sociedad colombiana, ambas se han desarrollado históricamente con diversos ritmos: el primero urbano,

conectado al mundo moderno, donde se genera la riqueza, la información y se aplica la tecnología; y el segundo con largos lazos de dependencia neocolonial y dilatado en el tiempo, improductivo, profundamente asimétrico, con propietarios ausentistas, de fuerte arraigo social, que desde los centros urbanos, próximos al latifundio, construyen sus redes clientelares, que les aseguran una alta convocatoria electoral, que tiene como base una sociedad campesina, donde se concentra la mayoría de pobreza absoluta y presenta los más dramáticos indicadores de necesidades básicas insatisfechas y de baja calidad de vida y que hoy representa el 32% de los colombianos¹⁰ y de una gran debilidad en la participación política.

Las diferentes caracterizaciones del régimen político colombiano coinciden en señalar su notable déficit democrático. De acuerdo con datos recogidos de la IDEA, Colombia es el país de América Latina con menor participación política. En promedio para medio siglo, apenas uno de cada tres colombianos recurre a las urnas a pesar que las elecciones son una práctica continuada sin interrupción cada cuatro años a partir de 1958. Por otra parte, el ejercicio de los derechos civiles y políticos no está asegurado y la vulneración de los derechos fundamentales y la ausencia de garantías mínimas es una constante (Alcántara y otro, 2001:18).

La hibridación de estos dos mundos generó unos imaginarios en los que los fines justifican los medios, para ello, se invirtieron los valores éticos de la sociedad y del manejo de la cosa pública desde la magistratura, por valerse de todo tipo de artimañas legales, a los saqueadores y las bandas delincuenciales no pudieron, en muchos casos, armarles un expediente y ser detenidos. Una nube de abogados y funcionarios públicos corruptos impidieron la acción de la justicia; el caso más rocambolesco fue el del asesinato del senador de la Unión Patriota Manuel Cepeda Vargas (1930-1994), en el que un juez de la República exoneró a su autor material Carlos Castaño Gil (1964-2004) por falta de pruebas y a los pocos meses, en su libro *Mi confesión* (2001), el mismo jefe paramilitar reconocía su autoría. Al querer anexar al expediente el libro del asesino confeso, como prueba documental, la declaración la negó el fiscal del caso, aduciendo vencimiento de términos.

En contravía de otros países de América Latina, la insurgencia en Colombia no inició con la guerra fría, ni terminó con ella; sus raíces se deben encontrar, entonces, en las contradicciones no resueltas de la sociedad colombiana, aunque no se puede desconocer que la Revolución cubana (1959) o la victoria del Frente Sandinista en Nicaragua (1979) revalidó su forma de

10. Leer el informe del PNUD 2011, sobre Desarrollo Humano. Colombia rural, razones para la esperanza. Bogotá.

lucha, y también alertó a las clases dominantes sobre los peligros vigentes de la lucha armada, ésta adoptó las nuevas políticas contrainsurgentes diseñadas desde Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, mejor conocido como la Escuela de las Américas (1963-2001) y que se enmarcaba dentro de la concepción de la guerra de baja intensidad, implementada desde el Pentágono a partir de los años ochenta, y que trataba de reelaborar su discurso de guerra para el Tercer Mundo después de la derrota en Vietnam y en contra del discurso del Partido Demócrata, que encarnaba la política de derechos humanos durante la administración de Jimmy Carter (1977-1981), que produjo confusión en las élites gobernantes en América Latina en un momento en que gran parte de ella era gobernada por militares o por una combinación entre éstos y civiles, muchos de ellos influenciados o alumnos de esa fatídica “Escuela de las Américas”.

Los sucesos de Nicaragua y el ruido de tambores de guerra en El Salvador, Ecuador, Perú y Chile, además, del fortalecimiento de las guerrillas en Colombia, hacen replantear esta política “confusa” de los Estados Unidos, que debilitó su presencia como potencia militar y que las élites locales interpretaban como un socio histórico que las había abandonado y en algunas ocasiones traicionado frente al enemigo interno; la reacción de Norteamérica no se hizo esperar, los republicanos ascienden al poder en cabeza de Ronald Reagan (1981-1989), como dijo su canciller Kissinger:

El nuevo presidente pretendía poner fin a la guerra fría mediante un implacable enfrentamiento... Sus objetivos fueron formulados desde el inicio de su gestión: combatir la presión geopolítica soviética hasta que el proceso de expansionismo hubiese sido, primero, contenido y, luego, invertido. En segundo término, lanzar un programa de rearme destinado a parar en seco la búsqueda soviética de una superioridad estratégica para convertirla en un verdadero estorbo (Kissinger, 1995:767).

Una de las prácticas exitosas de esta nueva concepción de la guerra irregular en Centroamérica, fue el aprovechamiento financiero y logístico de nuevos actores que hacían presencia en la región: el narcotráfico, tolerado en la medida que sirviera a la “causa anticomunista”, el tráfico de armas y de recursos financieros y que en su versión pública se conoce como el escándalo IRÁN-CONTRA, que operó entre los años de 1985 y 1986, financiando a Irán en su guerra contra Irak, y, en Nicaragua, costearo a éste país las fuerzas irregulares opuestas a la revolución sandinista: *prácticamente toda la ayuda a los contras fue a parar al FDN (Fuerza Democrática Nicaragüense)*, representante político de la contrarrevolución (Cockcroft, 2004:265).

Esta experiencia fue replicada y mejorada en Colombia, donde al contrario de Centroamérica, el conflicto social era mucho más extenso y añejo,

con participación histórica de diversos actores sociales, lo que hacía desde el comienzo mucho más complejo su análisis, comprensión, desarrollo y posibles soluciones. Algunos grupos, como las FARC (1964), provenían de la violencia de los años cincuenta y tenían como base las autodefensas campesinas del centro de Colombia, área de influencia histórica del Partido Comunista. En los comienzos de los sesenta se organizan otros grupos insurgentes, como el ELN (1964) y el EPL (1965), que representaban las capas medias urbanas y el naciente movimiento estudiantil, que se habían formado por influencia directa de la Revolución cubana, posteriormente surgieron grupos “terceristas”, como el M-19 (1974), escisión de las células urbanas de las FARC y de políticos de partidos populistas como la Alianza Nacional popular, ANAPO (1961), de una clase media urbana que pedía aceleradamente cambios sociales, y el indigenista Quintín Lame (1980), estos últimos en los años setenta del siglo pasado, con influencia en las comunidades indígenas del Cauca, agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y los cabildos indígenas del sur del Tolima.

Este variopinto panorama de movimientos insurgentes representaba un arcoíris de diferencias y matices en la comprensión de la lucha revolucionaria, desde la ortodoxia clásica del P.C, pro-soviético, pasando por la línea albanesa del EPL, hasta las tendencias socialdemócratas del M-19; en muchas ocasiones sus contradicciones opacaban los objetivos por los cuales fueron creados, como era democratizar a la sociedad colombiana y combatir el asfixiante bipartidismo. Uno de los pocos momentos en el que hubo consenso de las fuerzas insurgentes fue cuando se creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (1983) que aglutinaba a las FARC, M-19, EPL y ELN. Durante su corta vida, la sociedad conoció las contradicciones ideológicas de estos proyectos armados, en especial, el tipo de sociedad que pretendían construir y si las armas eran un fin o un medio para hacer política, esta instancia perdió toda relevancia ante el proceso de paz emprendido por dos de sus miembros (M-19 y EPL), quedando nuevamente las guerrillas de los años sesenta, que estaban comprometidas con cambios estructurales profundos, como los sucedidos en Cuba, pero que representaban dos proyectos políticos diversos: el soviético y el cubano.

Por otra parte, en Colombia el paramilitarismo tiene un origen aun más antiguo que el surgimiento de las primeras autodefensas campesinas de principios del siglo XX, se lo puede ubicar en el origen mismo de las guerras partidistas y caudillistas de mediados del siglo XIX, cuando regiones enteras, en cabeza de sus más poderosos hacendados y/ o caudillos políticos, muchos de ellos influyentes y ricos terratenientes, se sublevaban en contra del Estado central, el que a su vez convocaba a sus militantes y simpatizantes a luchar contra los que desestabilizaban el régimen de turno; casi todas estas guerras civiles, se dieron en torno al rumbo que debía tomar

el joven Estado: la élite más cosmopolita y, por tanto, con más contacto con los cambios mundiales, abrazaba el federalismo, sistema que en pocos años estaba convirtiendo a los Estados Unidos de América en una nación desarrollada, y que para el caso colombiano, respetaba la autonomía de las históricas y aisladas regiones que conformaban su territorio, sus élites, sus privilegios y sus formas de gobierno, que se generaron a través del tiempo y que representaba el caudillo liberal Manuel Murillo Toro (1816-1880), cónsul en Nueva York y dos veces presidente de Colombia (1864-1866, 1872-1874), centró toda su actividad en industrializar el país, introdujo el telégrafo y la educación laica y gratuita e implantó las ideas del liberalismo económico, con gran oposición del clero y del partido conservador.

Sus contradictores conservadores, opuestos a la modernización del país, desde muy temprano comulgaron con el modelo centralista francés, surgido bajo el temor de que se revivan nuevos levantamientos sociales como el de 1789, y que para el caso colombiano tuvo el respaldo de la poderosa Iglesia católica, e ideológicamente se inscribió en las ideas positivistas de Augusto Comte, sintetizada en la frase del escudo nacional, **libertad y orden**, diseñado por el “positivista vernáculo” y dos veces presidente, Rafael Núñez (1825-1894), el regenerador y enemigo de las ideas liberales, ascendido al poder como ganador de la guerra civil contra el “Olimpo Radical” (1848-1886), creó la Constitución de 1886, vigente, con algunos cambios, hasta 1991, reflejo de la victoria del pensamiento conservador y sus aliados contra las ideas liberales, que al contrario de los países vecinos, triunfaron durante finales del siglo XIX y principios del XX (Guadarrama, 2004:70).

De esta manera, Colombia transitó, casi todo el siglo pasado, con una constitución que ya no representaba ni el sentir ni el desarrollo del país, y que obligó a liberales y posteriormente a comunistas a oponerse sistemáticamente a su aplicación y, para ello, el partido liberal y/o conservador llaman periódicamente a sus “ejércitos privados” a defender el statu quo y sus privilegios, o a unirse en contra de la amenaza bolchevique, ideario de la guerra fría y que, en los años ochenta del siglo pasado, se plasma en la concepción norteamericana de la “guerra de baja intensidad” (GBI), diseñada en el manual militar del ejército de los Estados Unidos de América, 100-20 (Military Operations in Low Intensity Conflict), el que incluye la lucha contra la insurgencia y contrainsurgencia de los “enemigos internos” de sus gobiernos aliados y, desde el frente político y económico la aplicación a sangre y fuego del llamado “Consenso de Washington” (1989), cuyo argumento central era el impulso de las políticas aperturistas y neoliberales, las cuales se habían impuesto en los años setenta en el Cono Sur de Amé-

rica, a partir de la implementación de la GBI, que en Colombia se debían efectuar en la lucha contra el enemigo interno de la subversión, en primera instancia, y luego con agentes distorsionadores de la realidad económica, el narcotráfico y sus aliados.

DISENSOS Y CONSENSOS EN AMÉRICA LATINA

Aunque esta visión militarista de resolver el conflicto colombiano fue la que predominó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), no tuvo los resultados esperados de exterminar por vía de las armas a la insurgencia. Aunque los insurgentes perdieron territorio alrededor de los principales centros urbanos, se consolidaron en sus históricos bastiones de la frontera agrícola y afinaron su maquinaria de guerra, como se pudo observar en los recientes enfrentamientos del departamento del Cauca, donde, por primera vez, fue derribado un avión de fabricación brasilera, Super Tucano (El Espectador: 12 de julio de 2012), aumentaron su presencia en la costa pacífica y en departamentos como Cauca, Nariño, Valle y Putumayo y convirtieron a las fronteras de Venezuela y Ecuador en corredores estratégicos de aprovisionamiento y refuerzo de tropas.

En cuanto al frente externo, América Latina había cambiado después de la implosión del mundo socialista, la firma de paz en Centroamérica, y la llegada al poder de movimientos democráticos y de izquierda en diferentes gobiernos hizo que por primera vez, se visualizara la propuesta política de los antiguos y perseguidos “bandidos sociales”, muchos de ellos exitosos como la de Lula da Silva (2003-2011) en Brasil, Néstor Kirchner (2003-2007), en Argentina, y polémicos y reformistas como Rafael Correa (2006-) en el Ecuador y Hugo Chaves (1991-2013) en Venezuela, que impidieron validar la política represiva de Uribe Vélez, algunos rompieron relaciones diplomáticas y dejaron solo y mal acompañado a su gobierno, que se consoló con afianzar, en el frente interno, sus alianzas con sectores del “mundo torcido” hobsbawmiano, narcotraficantes, crimen organizado y los sectores más retardatarios del sórdido mundo rural colombiano y de algunos miembros de las fuerzas armadas, como se ha ido demostrando al caer uno a uno los funcionarios y amigos políticos de los últimos gobiernos, en los escándalos denominados periodísticamente como la “parapolítica”, todos ellos enemigos acérrimos de la solución pacífica del conflicto y de reformas sustanciales a la modernización de la vida constitucional de Colombia.

El cambio de apreciación del conflicto armado del actual gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), de la confrontación abierta y radical a la negociación política, muestra un cambio en la élite política gobernante: se pasó de los terratenientes tradicionales rurales, que viven de la especulación de la tierra y la ganadería, profundamente reaccionarios e improductivos

económicamente, a una élite urbana, industrial y financiera, más realista y ubicada en las nuevas condiciones del mundo actual, que quiere explorar nuevos nichos económicos, como son la minería, en especial la explotación petrolera (motivada por la inestabilidad del mercado venezolano) y de la agroindustria en lo que hoy se llama la altillanura del Orinoco (una tercera parte de las tierras potencialmente agrícolas), compuesta fundamentalmente por tierras baldías y con baja densificación poblacional y potencialmente una reserva territorial para repoblar un país pos-conflicto, de los “bandidos sociales” que hoy impiden el funcionamiento a plenitud de las locomotoras del desarrollo propuesto por el actual gobierno.

También se puede auscultar el interés de gobiernos extranjeros en solucionar este dilatado conflicto político, por tener intenciones de invertir ingentes recursos económicos en materias primas estratégicas para sus intereses, como la agricultura en gran escala, la minería y fundamentalmente el petróleo, todos estos recursos “amenazados” por las políticas proteccionistas y nacionalistas de los gobiernos progresistas de la región; esto puede explicar el apresurado aval producido por Estados Unidos de América a los diálogos de paz instalados en Oslo, el pasado 18 de octubre; paradójicamente, este mismo país invalidó los primeros diálogos agenciados por el presidente Belisario Betancur (1982-1986), cuando su embajador Lewis Tams (1982), acuñó la famosa frase de narcoguerrilla, minando el origen exclusivamente social del conflicto armado colombiano y desviándolo a sus intereses nacionales particulares sobre el combate de la droga, y que se mantiene en la mesa de negociaciones, hasta hoy, cuando uno de los puntos contemplados en la agenda de negociación es el fin de este negocio ilícito.

CONCLUSIONES

Se tiene entonces, que la solución del conflicto armado debe ser parte esencial de la refundación del Estado nacional, reconociendo que todas las partes involucradas en el conflicto han contribuido a la militarización de diferentes aspectos de la vida nacional, como son: la minería ilegal (la explotación de esmeraldas, del petróleo, del coltán), la explotación ilegal de madera del bosque tropical y la implementación del sistema de plantación en la Costa pacífica (palma aceitera), de la propiedad de la tierra rural y en algunas ocasiones de la propiedad urbana, del contrabando en todas sus versiones y también de la actividad política, como lo muestra el sonado escándalo de la parapolítica.

No se puede dejar de mencionar el aporte de estos actores, al continuo y corrosivo incremento de la corrupción en todas sus formas, en especial en el manejo de la contratación pública y en el sector de la salud, como lo indica la ONG, Transparencia por Colombia, que, en su Índice anual de

percepción de la corrupción año 2010, señala que el país estaba ubicado en el puesto 78, de un listado de 180 países.

Con este gran número de actores involucrados en el conflicto armado, se necesita una gran imaginación sociológica para buscar salidas democráticas duraderas, sobre cómo una sociedad puede reconstruir su historia y la puede cambiar (W. Mills: 1961), para enmendar los imaginarios de convivencia, resiliencia, solidaridad y tolerancia afectados desde su propio ADN fundacional. Este nuevo intento de “pacto social prístino”, debe resolver de una vez por todas la convivencia y tolerancia, por primera vez en la vida republicana, de todos los actores políticos y sociales de la república, el ingreso pleno a la modernidad electoral e institucional, la convivencia pacífica, y, en especial, replantear el modelo económico y político excluyente, que orgullosamente mantienen los principales actores dirigentes y productivos del país, que han convertido a un país rico y diverso, como Colombia, en el tercer país más desigual de América Latina y en una nación inviable para cerca del 60% de su población¹¹, donde se pueda garantizar hacia el futuro, que nadie por ninguna circunstancia combine política con armas, que se garantice el accionar libre y democrático de los actuales actores políticos, que la tierra sea un factor productivo y que la minería no se convierta en un nuevo averno ecológico y extractivo para sus pobladores.

Hoy es la oportunidad de construir una Colombia hacia el siglo XXI, donde los hijos entierren a sus padres, y no, como hoy, donde los padres deben enterrar a sus hijos.

11. Leer Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcántara Sáez, Manuel y otros (2001). *Colombia ante los retos del siglo XXI, desarrollo, democracia y paz*. Ediciones Universidad de Salamanca. Bogotá.
- Arango, Gonzalo (1993). *Obra negra*. Santa Fe de Bogotá, Plaza & Janés, primera edición en Colombia.
- Cockcroft, James D. (2004). *América Latina y Estados Unidos*. Edición Ciencias Sociales. La Habana. p. 265.
- Duncan, Gustavo (2004). *Violencia y conflicto en Colombia como una disputa por el control del Estado en lo local*. Documento CEDE 2004-11. CEDE. Universidad de los Andes. Bogotá.
- Fernández, Elsa María (2002). *El narcotráfico, la descomposición política y social. El caso de Colombia*. Editorial Plaza y Valdés. México.
- Ferro Medina, Juan Guillermo y otro (2006). *El orden de la guerra, las FARC EP, entre la organización y la política*. Centro Editorial Javeriano. Bogotá.
- Gossaín, Juan. *La mala hierba*. Plaza & Janés. Bogotá. 1983.
- Guadarrama, Pablo (2004). *Positivismo y anti positivismo en América Latina*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana.
- Hobsbawn, Eric (2003). *Bandidos*, Editorial Crítica. Barcelona.
- _____ (1959). *Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*. Universidad de Manchester. Manchester.
- Jaramillo, Carlos Eduardo (1987). *Tulio Varón, el guerrillero de "la esperanza"*. Edición Contraloría General del Tolima. Ibagué.
- Kissinger, Henry (1995). *La diplomacia*. FCE, México.
- Londoño Botero, Rocío (2011). *Juan de la Cruz Varela: Sociedad y política en la región del Sumapaz (1902-1984)*. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 708 pp.
- Paramio, Ludolfo y otros (2006). *Una nueva agenda de reformas políticas para América Latina*. Siglo XXI. Madrid.
- Pécaut, Daniel (1985). *Once ensayos sobre la violencia*, Fondo editorial CERES, Bogotá.
- PNUD (2011). *Informe anual de desarrollo humano. Colombia rural razones para la esperanza*.
- Roll, David (2002). *Rojo difuso y azul pálido, los partidos tradicionales en Colombia, entre debilitamiento y la persistencia*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Saavedra, Ruth (2001). *Planificación del desarrollo*. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. pp. 156-157.
- Sánchez, Gonzalo y otro (1983). *Bandoleros, campesinos y gamonales*. El Áncora editores, Bogotá.
- Umaña Luna, Eduardo y otros (1963). *La violencia en Colombia*. Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Wright Mills, Charles (1961). *La imaginación sociológica. Fondo de cultura Económico*. México.

PERIÓDICOS

EL ESPECTADOR, Bogotá.